

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, primero (1) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de Tutela**
Radicación: **2023-00024**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por el señor **LUIS ALFONSO CARMONA OTERO** en contra de **CARCEL DISTRITAL DE VARONES ANEXO MUJERES DE BOGOTA, / SECRETARIA DE SEGURIDAD Y COVIVENCIA DEFENSORIA DEL PUEBLO, / MINISTERIO DE JUSTICIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO.**

II. ANTECEDENTES:

2.1.- HECHOS (SÍNTESIS):

PRIMERO: Fui capturado aproximadamente en el mes de septiembre de 2020, por el delito de tráfico de estupefacientes, condena que conoció el Juez 44 Penal del Circuito Con Función de Conocimiento de Bogotá y posteriormente el juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, llevando más de la mitad de la condena a favor del suscrito, llevando un tratamiento con el equipo interdisciplinario de carácter progresivo conforme a la norma, descontando en trabajo y estudio como lo certifico las horas redimidas en Cárcel Distrital y avanzando desde la captura con fase de observación y diagnóstico, luego a inducción al tratamiento y posteriormente a fase de alta seguridad y haciendo los cursos para el cambio a fase de mediana seguridad, que a la fecha no se ha dado.

SEGUNDO: Consecuente con lo anterior, llevando en CARCEL DISTRITAL DE VARONES ANEXO MUJERES DE BOGOTA. Desde el mes de septiembre de 2020, presentando Acciones constitucionales de petición en fecha noviembre 2022, como consta en anexo adjunto no he recibido información, tampoco tratamiento penitenciario conforme al Código Penitenciario y Carcelario articulo 142 s.s. Además, de no tener en cuenta lo siguiente:

- Se reflejó aproximadamente en fecha 01 diciembre de 2021, condenado por el Juzgado 31 Penal Circuito Función de Conocimiento otro proceso en contra del suscrito con radicado 11001 6000 000 2021 01839 00, posteriormente conoció el Juzgado 27 EPMSB, por el delito de tráfico de estupefacientes, donde el abogado de su momento supuestamente solicito la acumulación jurídica, información que desconozco y me está vulnerando el acceso a la justicia.*
- De lo anterior, al desconocer la solicitud de acumulación jurídica se me está vulnerando el derecho a que no haya penas tortuosas en Colombia, al no haber podido alcanzar su tratamiento penitenciario por culpa de un error del sistema a favor de la administración de justicia siendo la misma quien se encargue del procedimiento de la solicitud de acumulación.*
- Consecuente, vulnera derechos fundamentales al acceder a la justicia, pues es de anotar, que si no demuestro tratamiento penitenciario a un Juez*

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, va hacer más difícil acceder a los beneficios y más injusto cuando he cumplido a cabalidad el debido proceso y la administración de justicia, me está cargando un problema que no está en mi terreno y que me está perjudicando para acceder a mis solicitudes, pues van hacer negadas por falta de demostrar tratamiento penitenciario que se presume es el fin de la pena.

2.2. PETICIÓN:

Solicita:

PRIMERO: Solicito con prelación el cambio de fase a mediana seguridad a favor del suscrito, en razón al tiempo que llevo privado de la libertad teniendo en cuenta la redención certificada, y la acumulación jurídica a favor del suscrito, en garantía del juez constitucional que debe velar cuando los derechos fundamentales están en amenaza o vulnerados y generar medidas inmediatas para la protección de derechos humanos.

SEGUNDO: Solicito información sobre la acumulación jurídica a favor del suscrito LUIS ALFONSO CARMONA OTERO, en razón que el profesional del derecho de su turno nunca me notifico del resuelve de la acumulación y tener información sobre el Juzgado de EPMSB que avoco conocimiento de la acumulación jurídica a favor del condenado.

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 20 de enero de 2023 se admitió la acción constitucional (archivo digital 08), en el que se ordenó notificar a las partes, se vinculó como parte pasiva de la presente acción Al Juzgado 44 Penal del Circuito Con Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juzgado 31 Penal Circuito Función de Conocimiento, Juzgado 27 EPMSB y solicitarle a la entidad accionada contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTAS:

JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. (archivo digital 11): El juzgado informó que: En auto del 16 de abril de 2021, esta oficina avocó el conocimiento de la actuación surtida en el radicado No. 11001-60-00-023-2019- 06976-00 respecto de los sentenciados CRISTIAN CAMILO RAMOS LONDOÑO y LEIDY XIMENA GARCIA ORTIZ, LUIS ALFONSO CARMONA OTERO quienes fueron condenados por el JUZGADO 44 PENAL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ mediante sentencia del 9 de Junio de 2020 a la pena principal 16 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por igual lapso al de la pena principal, por haber sido hallados responsables del delito de LESIONES PERSONALES donde se les CONCEDIÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena.(Constitución de Caución y Suscripción de Diligencia de Compromiso)-.

Al evidenciar que los condenados no cumplieron con las obligaciones para acceder al subrogado concedido, se dispuso oficiar al Juzgado de conocimiento para que informaran sobre ello, de la misma forma se requirió a los penados para que acreditaran la observancia de las obligaciones impuestas una vez concedido el subrogado penal, para lo cual cuenta con un término de diez (10) días hábiles a partir del recibo de la comunicación.

En providencia del 15 de junio de 2021, vencido el traslado antes indicado y ante la omisión del hoy accionante, se dispuso dar inicio al traslado contenido en el artículo 477 del C. de P.P..

En providencia del 30 de agosto de 2021, se dispuso ordenar la ejecución de la pena de 6 meses, fijada por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, decisión que se encuentra en firme, siendo requerido el señor CARMONA OTERO con orden de captura.

Es necesario indicar que a instancia de esta oficina judicial no obra solicitud de acumulación jurídica de penas, advirtiéndose a la fecha, que el sentenciado se encuentra privado de su libertad por cuenta del radicado No. 2021-01839-00 a órdenes del Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, oficina judicial a la cual será remitida por competencia la presente actuación.

Bajo el convencimiento que esta oficina judicial no se encuentra incurso en violación a derecho fundamental alguno, de manera comedida solicito se decrete la improcedencia de la misma.

JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÀ (archivo digital 12): Señaló:

1. Efectivamente, por reparto, a este estrado judicial le correspondió conocer la actuación identificada con el CUI 11001 60 00 023201906976, seguida en contra del ciudadano Luis Alfonso Carmona Otero por el punible de violencia contra servidor público, causa en la que el accionante obra como procesado.

2. Una vez surtido el respectivo trámite procesal, el 9 de junio de 2020, la instancia emitió sentencia de carácter condenatorio en contra de Luis Alfonso Carmona Otero, en mérito del preacuerdo celebrado entre la defensa y Fiscalía, en el que se varió la calificación jurídica inicial por la de lesiones personales, imponiéndole una pena de dieciséis -16- meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal de prisión; a su turno, se le concedió el mecanismo sustitutivo de suspensión de la ejecución de la pena al reunirse los requisitos para tal finalidad.

3. Atendiendo lo anterior y de conformidad con los hechos expuestos, esta instancia no ha tenido intervención frente a la censura del actor en este trámite constitucional, en la medida que a la fecha no se ha recibido la actuación para resolver una eventual apelación frente a la decisión que desate la pretensión sobre acumulación jurídica de la pena, tampoco peticiones del interesado a las que no se les haya ofrecido respuesta, en tanto, este juzgado no ha conculcado los derechos fundamentales de los que se implora protección, por lo que se solicita, respetuosamente, la desvinculación del trámite de la referencia.

JUZGADO 31 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÀ (archivo digital 13): informó:

1.- El día dieciocho (18) de agosto de 2021 se llevó a cabo preacuerdo dentro del radicado 110016000023201903431, donde a los procesados CARLOS ANDRES ALMONACID y LUIS ALFONSO CARMONA se les condeno por la conducta punible de Trafico, Fabricación o porte de estupefacientes.

2.- De lo anterior, se ordenó la ruptura procesal para los antes mencionados, asignándoles el número de proceso 110016000000202101839 y fijando fecha de lectura de fallo para el ocho (08) de septiembre de 2021.

3.- El día ocho (08) de septiembre de 2021 se llevó a cabo audiencia de lectura de fallo y por consiguiente el día doce (12) de octubre de 2021 se remitió la carpeta al centro del servicios judiciales a fin de que fuese remitida a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para lo de su competencia.

4.- Según las anotaciones que reposan en la página de la rama judicial, se puede avizorar que el Centro de Servicios Judiciales remitió los oficios pertinentes al director de la Cárcel Distrital, informándole la sentencia condenatoria contra los señores CARLOS ANDRES ALMONACID y LUIS ALFONSO CARMONA.

5.- Finalmente, el día quince (15) de diciembre se remite el proceso a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Respetado Juez, considera este Despacho que no le ha sido vulnerando derecho alguno al señor LUIS ALFONSO CARMONA OTERO, pues el trámite que se llevó a cabo dentro del Despacho, se realizó en los términos de ley y tal como se indio anteriormente, este Juzgado actuó en derecho dentro del trámite penal aquí adelantado

DEFENSORÍA DEL PUEBLO (archivo digital 14): argumentó que Con relación a los derechos que plantea el actor como presuntamente violentados, sea lo primero advertir, que con la confesión de parte realizada por el actor, sea lo primero advertir que ni la Defensoría del Pueblo, ni el Sistema Nacional de Defensoría Pública, son operadores del derecho, para disponer acumulación de penas. De otra parte tampoco administra ni regenta establecimientos penitenciarios para disponer cambio de fase penitenciaria de ningún interno, de tal suerte que nada tiene que ver la Defensoría del Pueblo, con las pretensiones del accionante.

En cuanto a las pretensiones, la Defensoría Regional es absolutamente ajena, en el entendido, que no somos operadores del derecho, y que lo que hacen es suministrar un defensor público para que asuma la representación judicial de las personas que carecen de recursos económicos, que ni siquiera es el caso del accionante pues en ejercicio de su derecho de postulación, ha sido asistido por defensores contractuales.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO (archivo digital 15): Indica la entidad que El artículo 144 de la ley 65 de 1993 registra que dentro de las fases del tratamiento penitenciario se encuentra la fase de mediana seguridad, y es competencia única y exclusiva del Consejo de Evaluación y Tratamiento del Establecimiento Carcelario donde se encuentra recluso el accionante, esto es de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres de Bogotá. Igualmente manifiestan que como lo señala el señor Luis Alfonso Carmona Otero, todas sus peticiones y solicitudes han sido dirigidas a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres de Bogotá, siendo esta la entidad responsable de dar respuesta y tramitar lo concerniente al cambio de fase de tratamiento y lo concerniente a la acumulación jurídica de penas. Por lo tanto, le corresponde a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres de Bogotá, atender el requerimiento del accionante.

Finalmente señalan que frente a ellos existe una falta de legitimación en la causa por carecer de legitimidad para atender los requerimientos del accionante.

JUZGADO 27 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. (archivo digital 16): informó:

En este estrado judicial cursa la vigilancia de la ejecución de las penas a Luis Alfonso Carmona Otero dentro del CUI No. 11001-60-00-000-2021-01839-00, donde fue condenado a la pena de 32 meses de prisión (960 días, Art. 147 EPC 1/3 = x días, Art. 38G CP 50% = 480 días, Art. 64 CP 3/5 = 576 días), multa de 1 SMLMV e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal, por haber realizado la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes prevista en el art. 376 inc. 2 del CP, en calidad de coautor. Le negaron la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria del art. 38 B del CP.

En auto de 19 de enero de 2022, este Despacho decidió, entre otros, se solicitó al Juzgado 17 Homólogo de esta ciudad remitir por competencia las carpetas del CUI No.- con el fin de estudiar la acumulación jurídica de penas, por tanto, una vez resuelta la solicitud, se remitirá el auto correspondiente a su Despacho y al accionante, para evitar la vulneración de derechos fundamentales.:

Dicho auto fue enviado al Centro de Servicios Administrativos de estos estrados judiciales y al centro de reclusión para la notificación al accionante para enterarse del estado de su solicitud de acumulación jurídica de penas.

Debe manifestarse que, a pesar de haberse enviado oficio a la Cárcel Distrital con el fin de establecer por cuenta de qué autoridad se encuentra privado de la libertad, pero al momento de realizar esta respuesta, no se ha recibido respuesta alguna.

Por tal motivo, se solicita de manera respetuosa la improcedencia de la acción promovida por Luis Alfonso Carmona Otero en contra de este Despacho, pues se ha dado respuesta a su solicitud, motivo por el cual no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante.

Es importante señalar que la Cárcel Distrital de Varones y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES:

1. COMPETENCIA

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela es un mecanismo de amparo judicial que permite a las personas exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando se presente una violación o amenaza de violación por actos, hechos, omisiones u operaciones de cualquier autoridad pública, o por la acción u omisión de particulares bajo ciertas y determinadas circunstancias que define la Ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario, es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

3. MANEJO AUTÓNOMO DEL INPEC FRENTE A ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA PENITENCIARIO:

Existen normas legales que regulan el régimen penitenciario y carcelario, y además disposiciones complementarias que facultan al INPEC y en este caso a

la Cárcel Distrital de Varones de Bogotá, para manejar autónomamente los asuntos relacionados con el sistema penitenciario, entre ellos la fijación del sitio de reclusión de los internos puestos bajo su custodia y los traslados en los casos que estos sean indispensables.

Es imperioso señalar que la finalidad del tratamiento penitenciario es alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, preparándolo así para la vida en comunidad. En efecto, este procedimiento que deberá realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada individuo, a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia.

Sobre este asunto, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integra el bloque de constitucionalidad incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 74 de 1968, en el artículo 10.3 se indica:

"El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados".

Sobre este asunto, en reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional en sentencia T-009 de 2022, indicó:

*"... la cláusula del Estado Social de Derecho y el principio de dignidad humana imponen límites al poder punitivo del Estado y enmarcan su política criminal¹. **De hecho, uno de los ejes que materializa la dignidad humana en la mencionada política es el reconocimiento de la resocialización** de la persona condenada como objetivo principal de la pena. Incluso, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) establecen que "[l]os objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia"². No obstante, la Sentencia T-762 de 2015 reiteró la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria al advertir, entre otras circunstancias, que el sistema penitenciario no cumple su función de prevención especial de la pena relacionada con la reincorporación efectiva del condenado a la sociedad. Asimismo, destacó que la resocialización no solo repercute en beneficios para el privado de la libertad, pues simultáneamente, por cuenta de esa prevención especial, se generan consecuencias positivas para la comunidad. Por el contrario, abandonar tal enfoque hace que el sistema penitenciario y carcelario se convierta en un sistema multiplicador de conflictos que impone mayores costos al conglomerado social⁴. Por ese motivo, estableció los estándares constitucionales mínimos que la política criminal respetuosa de los derechos humanos debe cumplir y, entre estos elementos, se encuentra que la política criminal **debe** buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados.*

Por otro lado, el concepto de resocialización no aparece en el texto

¹ Sentencia SU-294 de 2021 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

² La Regla 4 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) plantea lo siguiente: "1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. // 2. Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos".

³ M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

⁴ La Sentencia T-762 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado refirió particularmente que en las condiciones en las que opera el sistema penitenciario actual "genera más y 'mejores' delinquentes (la cárcel como universidad del delito), lo que finalmente termina siendo más costoso para el conglomerado social".

de la Constitución Política de 1991. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha interpretado las normas superiores en el sentido de precisar que de estas se deriva que la resocialización o readaptación del condenado es el objetivo prevalente de la pena. Al respecto, la Sentencia T-851 de 20025 expuso que las autoridades no pueden perder de vista que el fin de la pena es la resocialización del infractor. Este propósito corresponde con lo dispuesto en el artículo 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Asimismo, el contenido de esta disposición fue precisado por el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 21, al enunciar que “ningún sistema penitenciario debe estar orientado solamente al castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación social del preso”. A lo anterior se suma el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que consagra como finalidad de la pena “la reforma y la readaptación social de los condenados”.

*El reconocimiento de la resocialización como fin principal de la pena de prisión se sustenta en la dignidad humana, pues confirma que la persona condenada no pierde su condición humana como consecuencia de la infracción de la ley penal y del cumplimiento de una pena privativa de la libertad. En consecuencia, el Estado debe brindarle alternativas que le permitan reconocer el daño que causó, pero al mismo tiempo, incentivar un nuevo inicio y el desarrollo de una vida en condiciones dignas tanto en el cumplimiento de la pena de prisión como en su reincorporación a la vida en sociedad una vez cumplida la pena correspondiente*6.

Ahora bien, la Ley 65 de 1993 es el Código Penitenciario y Carcelario de Bogotá y regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad.

Respecto al tratamiento penitenciario, tema objeto de la presente acción constitucional, en su artículo 143 la citada ley señala que:

El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible.

Por su parte, el artículo 144 ibidem, regula las fases del tratamiento penitenciario e indica que:

El sistema del tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:

- 1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno.*
- 2. Alta seguridad que comprende el período cerrado.*
- 3. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.*
- 4. Mínima seguridad o período abierto.*

⁵ M.P. Rodrigo Escobar Gil.

⁶ Sentencia SU-294 de 2021 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.

Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa del INPEC suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del interno.

PARÁGRAFO. La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión.

Indica igualmente en su artículo 145 modificado por el artículo 87 de la Ley 1709 de 2014 que es competencia del Consejo de evaluación y tratamiento determinar el tratamiento penitenciario de cada persona. En efecto, señala:

En cada establecimiento penitenciario habrá un Centro de Evaluación y Tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos interdisciplinarios, de acuerdo con las necesidades propias del tratamiento penitenciario. Estos serán integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

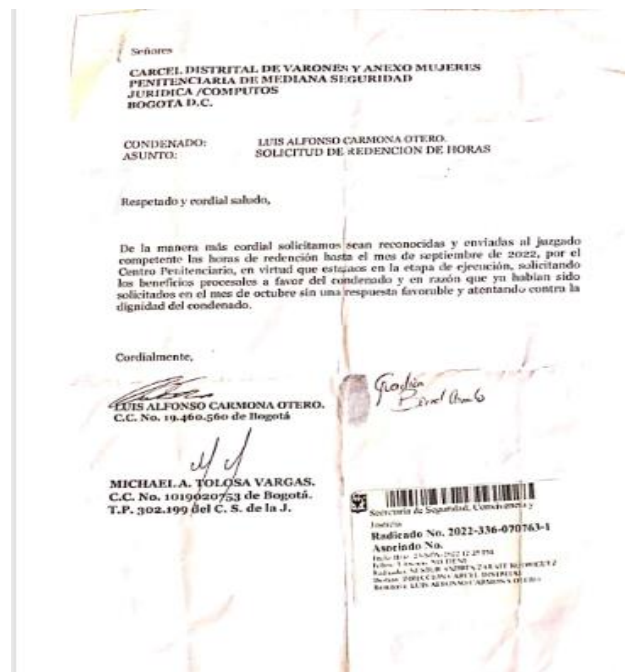
Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento penitenciario después de la primera fase. Dicho tratamiento se regirá por las guías científicas expedidas por el Inpec, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluación.

Estos consejos deberán estar totalmente conformados dos (2) años después de promulgada la presente ley.

4. EL CASO EN CONCRETO:

Descendiendo al caso objeto de estudio, encontramos que el señor LUIS ALFONSO CARMONA OTERO, al parecer se encuentra en tratamiento progresivo en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo para Mujeres, con el fin de obtener ciertos beneficios dentro de su condena.

Observa el despacho que el señor LUIS ALFONSO CARMONA OTERO coadyuvado por su apoderado judicial, solicitó en el mes de noviembre de 2022 a la Cárcel Distrital de Varones redención de horas hasta el mes de septiembre de 2022, tal y como pasa a verse:



De la anterior solicitud, dice el accionante, no ha recibido ninguna respuesta por parte de la Cárcel Distrital de Varones.

Sobre este aspecto, es importante destacar que, a pesar de encontrarse debidamente notificada la Cárcel Distrital de Varones, guardó absoluto silencio sobre la presente acción constitucional, así como al requerimiento que le hiciera el Juzgado 27 de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante el Oficio No. 130 del 23 de enero de 2023, a través del cual, el señalado despacho judicial le solicitó:

*Por este medio **de manera URGENTE**, información acerca de la ubicación del SANCIONADO: Luis Alfonso Carmona Otero C.C. 1.003.594.425 con el fin de establecer si se encuentra privado de la libertad en dicho establecimiento, desde cuándo, a disposición de qué autoridad y por cuenta de qué radicado se encuentra privado de la libertad.*

Encuentra entonces este juez constitucional que, la Cárcel Distrital de Carones con Anexo para Mujeres de Bogotá, a la fecha de expedición de esta sentencia, no ha dado respuesta a la petición que le hiciera el accionante, relacionada con el tratamiento de su reclusión.

Sobre **el derecho de petición**, es importante destacar igualmente que fue elevado al carácter de derecho fundamental por la constitución de 1991 en su artículo 23 se erige como un medio eficaz a través del cual se propicia la interacción del ciudadano con la administración como forma de desarrollar los fines del Estado, entre los que se destaca la participación ciudadana, instrumento paradigmático de la democracia participativa.

Este derecho fundamental se encuentra establecido en el artículo 23 de la Constitución, donde se prevé que “*toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución*”, expresión pronta que refiere el término de quince días al tenor de la Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respuesta que además oportuna, es decir, suministrarse en el término legal anotado, debe resolver de fondo el pedimento, ser clara, precisa y congruente con la petición elevada.

Al respecto en sentencia T 464 del 21 de junio de 2012, la Honorable Corte

Constitucional Magistrado Ponente doctor JORGE IVAN PALACIO PALACIO, expediente 3394627 dijo:

“La Constitución Política en su artículo 23 señala que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

La jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterativa en señalar el alcance de este derecho, indicando que la respuesta a este tipo de solicitudes debe contener los siguientes lineamientos: (i) pronta y oportuna, (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente con la situación planteada por el interesado, (iii) y ser puesta en conocimiento del peticionario. Al no cumplirse con estos presupuestos, se estaría vulnerando el mismo⁷. Al respecto, la sentencia T-377 de 2000, expuso:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

(...)

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

(...)

Por lo tanto, para satisfacer el derecho de petición, es importante que el interesado obtenga una respuesta pronta, de fondo, clara y precisa, dentro de un tiempo razonable que le permita, igualmente, ejercer los medios ordinarios de defensa judicial cuando no está de acuerdo con lo resuelto⁸."

Norma constitucional que desarrolla el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el sentido de que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, a obtener pronta resolución, completa y de fondo sobre la misma; así mismo indica que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en la constitución Política de Colombia artículo 23, sin que sea necesario invocarlo.

Es insoslayable que el respeto por cada uno de los elementos que hacen parte de la esencia del derecho fundamental de petición permite garantizar que las solicitudes respetuosas formuladas ante las autoridades serán prontamente resueltas, - favorable o desfavorablemente-, **atendiendo de manera precisa y concreta la petición. Por tanto, se satisface este derecho, cuando se emiten respuestas que resuelvan en forma sustancial la materia objeto de la solicitud, sin importar el sentido de la misma; y se comuniquen al interesado.**

Así, la falta de una respuesta oportuna, por ausencia de una completa y de mérito o por la falta de notificación efectiva, se entiende vulnerado el derecho de petición, en orden a lo cual procede el amparo Superior para disponer que se produzca la decisión que desate desde todos sus ángulos la solicitud demandada.

Pues bien, es claro para este juez constitucional que, actualmente existe una petición elevada por parte del señor LUIS ALFONSO CARMONA OTERO a la Cárcel Distrital de Varones con Anexo para Mujeres, que a la fecha no ha sido resuelta, petición relacionada específicamente con el tratamiento progresivo de su pena.

Sobre quiénes son las autoridades competentes para intervenir sobre estos asuntos, debemos decir que, de acuerdo con la normatividad arriba señalada, le corresponde al Consejo de Evaluación y Tratamiento, órgano colegiado integrado a partir de un equipo interdisciplinario en todos los centros de reclusión del país. Debe destacarse que, en relación con este asunto, el INPEC expidió la Resolución 7302 de 2005, en la que fija las directrices y organiza la forma en que deben llevar a cabo su labor los profesionales que integran dicho consejo.

Asimismo, también debe destacarse que desde la competencia judicial, le corresponde a los juzgados de ejecución y medidas de seguridad vigilar que la pena cumpla con el fin de la resocialización o reinserción social de los internos en los centros de reclusión, en el presente caso, observa el despacho que dicha función de vigilancia se ha ejercido por parte del Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, razón por la cual frente a dicho órgano judicial, no procede la presente acción constitucional, no pudiendo decir lo mismo respecto de la Cárcel Distrital de Carones con Anexo para Mujeres de Bogotá, que aún no ha resuelto la petición del señor CARMONA, relacionada con el tratamiento progresivo de su pena.

Por las anteriores razones, y sin más consideraciones por no ser ellas necesarias, se ampararán los derechos fundamentales del señor LUI ALFONSO CARMONA OTERO, y se ordenará a la Cárcel Distrital de Carones con Anexo para Mujeres de Bogotá, que en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a

⁸ Ídem

partir de la notificación de esta acción constitucional, de respuesta de fondo y forma a la petición elevada por el accionante el 23 de noviembre de 2023 con radicado NO. 2022-336-0707763-1, así como debe dar respuesta al requerimiento del Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, realizado mediante el Oficio No. 130 del 23 de enero de 2023.

Finalmente, se desvinculará de la presente acción al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Defensoría del Pueblo, al Juzgado 44 Penal del Circuito Con Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juzgado 31 Penal Circuito Función de Conocimiento, Juzgado 27 EPMSB.

En mérito de lo expuesto, EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley”,

V. RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales del señor **LUIS ALFONSO CARMONA OTERO**, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Cárcel Distrital de Carones con Anexo para Mujeres de Bogotá, que en un **término máximo de cuarenta y ocho (48) horas**, contadas a partir de la notificación de esta acción constitucional, de respuesta de fondo y forma a la petición elevada por el accionante el 23 de noviembre de 2023 con radicado NO. 2022-336-0707763-1, así como debe dar respuesta al requerimiento del Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, realizado mediante el Oficio No. 130 del 23 de enero de 2023.

TERCERO: DESVINCULAR de la presente acción al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Defensoría del Pueblo, al Juzgado 44 Penal del Circuito Con Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juzgado 31 Penal Circuito Función de Conocimiento, Juzgado 27 EPMSB.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

TERCERO: Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ